

EL PODER MILITAR EN LA II REPUBLICA Y LA CONSPIRACION DE 1936

Gabriel Cardona

(Universidad de Barcelona)

ES IMPOSIBLE ENTENDER LAS TRANSFORMACIONES POLITICAS DE la España contemporánea sin considerar el protagonismo del poder militar. La proclamación de la II República fue el primer cambio político ejecutado sin la intervención armada, pero esta misma República sucumbió *manu militari*, mediante el golpe que indicó la guerra civil y la sublevación de Casado, que la terminó.

El ejército había llenado todos los vacíos de poder que se producían en España, durante la crisis del canovismo, a partir de la proclamación de Alfonso XIII. La militarización de la política española culminó en la Dictadura de Primo de Rivera, solución de unas clases conservadoras que se habían revelado incapaces de organizar un verdadero partido y un régimen político parlamentario, capaces de defender sus intereses. La transferencia del poder a un general, pareció la solución idónea a un amplio abanico político que iba desde el reaccionarismo más puro al conservadurismo más civilizado. No parece que, al principio, existiera un rechazo claro a Primo de Rivera más que en la antigua clase política desplazada y algunos grupos minoritarios de los movimientos obreros, porque la mayoría del interés popular nada tenía que defender en el inoperante sistema de partidos que se hundió en 1923.

El verdadero centro del poder pasó a residir en el Ejército, como había ocurrido tantas veces durante el siglo XIX. En la atrasada sociedad española del primer tercio del siglo XX, el aparato militar respondía al cuadro general de incompetencia de las instituciones públicas. Sin crítica eficaz y sin haberse visto empeñado en una guerra moderna, el Ejército era una institución obsoleta, sin ninguna vocación europea ni modernizadora, en la que tenía más partidarios la caballería a caballo que la motorización, entonces contemplada en la técnica militar como ineludible. Mientras las grandes cargas de caballería habían fracasado en las batallas del frente francés de 1914, aquí existían todavía ocho regimientos de lanceros sin haberse incorporado todos los inventos militares de la Primera Guerra Mundial, como los carros de combate, la artillería antiaérea y contracarro, la guerra química....

La izquierda carecía de teorías elaboradas acerca del problema militar y únicamente Azaña contaba con un antiguo proyecto del año 1918, calcado de la estructura militar francesa pero ya pasado de moda. Sin embargo, los jalones conseguidos en Europa por el reformismo militar eran revolucionarios en España, donde el atraso había mantenido a los oficiales apartados de las mutaciones profesionales y políticos del extranjero, y los había considerado defensores de unas clases dominantes que poco tenían, en lo económico, que ver con ellos. La mayoría de militares españoles de los años 30 eran pobres funcionarios mal pagados de una burocracia armada e inoperante. Pero se consideraban aristócratas, en una

profesión donde la nobleza había retrocedido continuamente desde el siglo anterior. En un Ejército anticuado, sin material moderno, con la sola gloria de la primitiva campaña del Rif, el orgullo de casta era la única gratificación de podían esperar los oficiales. Y, dada la escasa potencia guerrera de su institución en el marco internacional, la conservación del orden en el interior y la integridad territorial de España, había pasado a ser su finalidad institucional. Ello les vinculó a posiciones totalmente conservadoras. De modo que, ya en plena República, cuando Primo de Rivera intentó manipular a los militares en beneficio de su débil partido falangista, lo hizo consignándoles como “defensores de lo permanente”. Con seguridad se trataba de una cuestión gramatical. Lo que el líder falangista llamaba “Lo permanente” en un lenguaje más preciso se habría llamado “el atraso”.

El principal problema de la República era combinar la superación de tal atraso con la estabilidad política y las angustiosas demandas de justicia social. El programa de reformas, planeado por los hombres de la República, debía capear las lógicas impaciencias de un pueblo hambriento y las asechanzas continuas de una derecha durísima, acostumbrada a gobernar, con todos los recursos económicos en su mano y que contaba con la simpatía de dos instituciones básicas: la Iglesia, con toda su capacidad propagandística, y el Ejército, acostumbrado a ser el defensor del sistema social que los republicanos pretendían transformar.

En un primer momento, el reformismo republicano en el campo militar contó con oficiales de izquierdas y con algunos más conservadores de los enfrentados a los manejos de la Dictadura de Primo de Rivera, como el general Goded o el comandante Peyre. Pero, a medida que se radicalizaban las posturas y la derecha salía del estupor en que la sumió el hundimiento de la monarquía, los conservadores se apartaron de Azaña. Y, en un proceso de radicalización, también, le abandonaron algunos oficiales de izquierdas. De manera que la política reformista en el ejército contó cada vez con menos apoyos entre los militares. Sin embargo, es preciso señalar la transformación que tal profesión había experimentado en toda Europa durante más de un siglo, y en la que participaban también los militares españoles. En su mayoría, el oficial había dejado de ser un aristócrata y un guerrero, para transformarse en un servidor del Estado, dependiente del sueldo y el escalafón, es decir que había asimilado muchas características del funcionario. Naturalmente, dejando a salvo la incidencia que había representado para muchos oficiales españoles la guerra de Marruecos.

Es decir, que subyacían en el Ejército español de los años 30 diversas realidades. En los oficiales se combinaba la tradición política de intervenir en los asuntos internos, de creerse parte de la aristocracia, de mantener anticuadas ideas políticas y sociales no actualizadas gracias al aislamiento respecto a los paisanos, y, simultáneamente, ser un mal pagado funcionario subordinado a más cuestiones administrativas que guerreras.

En resumen, la necesidad de salvar la carrera, mantenía en la disciplina a muchos hombres cuyas ideas estaban claramente enfrentadas a la política del bienio reformista. El grupo de oficiales con independencia económica, parcialmente abandonó las filas tras la proclamación de la República o quedó aislado entre la mayoría de militares-funcionarios.

Otro grupo militar estaba definido en dirección distinta, los mandos inferiores y los trabajadores del Ejército (guarnicioneros, armeros, etc.), había obtenido ventajas al advenimiento de la República, si bien no se colmó la totalidad de sus deseos. Ello configuraba un número de republicanos bastante mayor del que podía contarse entre los oficiales. Por último, la tropa, que en su inmensa mayoría era forzosa, no tenía otras aspiraciones en el seno del Ejército que licenciarse en el menor plazo posible.

En tal panorama es natural que no prosperasen los continuos complós que pequeños grupos de oficiales monárquicos organizaron desde el mismo momento de proclamarse la

República.

Las reformas de Azaña no modificaron la situación. Gran número de profesionales abandonó el Ejército, pero la ideología de quienes se quedaron no había experimentado variación. Únicamente había disminuido la edad media de las categorías más altas, es decir que se había eliminado la amortiguación de los impulsos a los mandos más jóvenes, que podía proporcionar el sanedrín de viejos generales, desde luego conservadores, pero menos aficionado a inciertas aventuras en las que podían perder la vida, la libertad o el derecho de jubilación. Este sentimiento hizo fracasar en gran parte la *sanjurjada*, en el verano de 1932. Existía una amplia conspiración muy mal organizada, pero muchos comprometidos no se sintieron arrojados por un amplio respaldo civil. La desorganización de la derecha no garantizaba el triunfo y muchos oficiales, aunque comulgaban totalmente con los alzados, los dejaron fracasar en solitario, antes de comprometerse en un fracaso intuido. Es evidente que existía un número minoritario de oficiales republicanos, pero la mayoría contraria al régimen sólo estaba dispuesta sublevarse para ganar.

Por otra parte, la reforma militar republicana fue incompleta. Azaña no estaba dispuesto a gastar el dinero del Estado en pertrechos militares y su modernización se quedó en las intenciones. Desde luego, creó una estructura y una organización más ágiles, pero ni hizo nada por formar un nuevo cuerpo de oficiales, ni introdujo reformas auténticas en la educación de los mandos ni prosiguió las reformas hacia una organización militar capaz de intervenir en una guerra exterior, tal como repetidamente había anunciado en sus discursos.

En realidad se limitó a poner las bases para mejoramientos posteriores y a separar la administración militar de la general del Estado a la que una complicada historia la había adherido. Pero la separación no fue completa y una cuestión tan delicada como el orden público continuó en manos de los militares, dada la carencia de funcionarios preparados en España para asumirlo y las graves confrontaciones sociales que obligaron a buscar remedio en los instrumentos que se tenía a mano. A pesar de su decidida voluntad civilista, la República echó mano al Ejército, como había hecho la monarquía, porque era la única institución capaz de mantener el orden en la calle y de vertebrar la policía uniformada.

Naturalmente se eliminaron las atribuciones judiciales de la autoridad militar, pero todos los conflictos de competencias fueron fallados en favor del fuero de guerra y ello contribuyó a mantener a los oficiales en la primera fila de la conflictividad interior y, en consecuencia de la administración de los recursos políticos.

En una institución que descansaba en un cuerpo de funcionarios mal pagado pero orgulloso, lo ideológico tenía un peso fundamental. En todos los ejércitos es así, pero en la España de la época el problema era acuciante. La mentalidad de los militares estaba influida por casi dos siglos de confusión respecto a las misiones del Ejército, a la manipulación a lo que habían sometido tradicionalmente las derechas y a las reacciones de defensa corporativa suscitadas por la pérdida de Cuba y Filipinas y la oposición ciudadana a la guerra de Marruecos. La Dictadura de Primo de Rivera había culminado la obra, integrando en las ideas dominantes del cuerpo de oficiales postulados fascistas y un importante confusio-nismo entre el servicio, el conservadurismo y el reaccionarismo. Ni Azaña ni nadie en las filas republicanas pareció percatarse de la urgente necesidad de sanear este confuso código moral, que influía sobre los análisis cotidianos de funcionarios tan poderosos y politizados. Nadie pareció entender que, en lugar de inocentes ataques al militarismo, era preciso y urgente organizar un nuevo sistema de valores que pudiera ser herramienta en manos de los minoritarios oficiales republicanos para luchar contra la subversión en los cuarteles. Al contrario, progresivamente se abrió camino el claro mensaje de que la intervención militar era el único camino para terminar con todos los males con que los políticos republicanos amenazaban a España, en los cuarteles ganó el golpismo una batalla que ni siquiera había

empezado.

Al proclamarse la República, en 1931, el militarismo era un enemigo agazapado y aislado por la desorientación de la derecha; en 1934 era ya un claro peligro político. La izquierda había perdido el poder y parecía haber quedado sin iniciativas. El primitivo proyecto azañista de formar en España un ejército apartidista había sido abandonado por la derecha, cuyo modelo de Estado poco tenía que ver con los viejos planteamientos del liberalismo europeo. Al contrario, su esquema mental pasaba por la instrumentalización del poder militar, como brazo armado que defendiera sus intereses. El Ejército debía recuperar su papel histórico del que los republicanos reformistas habían intentado apartarlo durante dos años.

El primer ministro de la Guerra por los radicales fue Diego Hidalgo, que se mantuvo en cotas moderadas mientras trataba de desvirtuar todo lo hecho por Azaña. Sin embargo, la revolución de octubre del 34 le desbordó. La represión del movimiento insurreccional fue encomendada al ministerio de la Guerra, cuyo titular, Diego Hidalgo, la puso en manos del general Franco al que no se había concedido ningún cargo oficial para ello. El general no era entonces sino uno de tantos mandos superiores, sobrepasado en muchos casos por sus compañeros. Su carrera había sido rápida como jefe de compañía y batallón de las fuerzas de choque, y como segundo de Millán astray, militar teatral y enredador como pocos. Cuando el Dictador Primo de Rivera decidió fundar la Academia de Zaragoza para socavar el espíritu de cuerpo de los artilleros, eligió como director a Millán Astray, pero tropezó con duras resistencias en el seno del mismo Ejército y desvió el nombramiento hacia Franco, que había sido su mano derecha. Al frente de la Academia, Franco no destacó por su agudeza o preparación técnica sino por esforzarse en formar un oficial duro, primitivo y cercano al tipo de mando que él había conocido en Marruecos.

Este destino, que duró tres años, fue el único de verdadera importancia en cuanto al quehacer intelectual.

Desde la disolución de la Academia, Franco desempeñó una vida burocrática y oscura de guarnición, hasta que, casualmente, entró en contacto con Diego Hidalgo al que supo impresionar favorablemente. Desde entonces, el ministro sintió debilidad por el militar, como antes había ocurrido con Alfonso XIII, y lo llamó para resolver la complicada situación en que la revolución de octubre había puesto al gobierno.

Aquella ocasión la aprovechó el general para hacerse famoso entre las derechas. Condujo las operaciones con energía, lanzó las mejores tropas coloniales contra el improvisado barullo del "Ejército Rojo" y arrolló la revolución en escaso tiempo. Desde entonces, apareció como el hombre capaz de acabar con el peligro revolucionario, al frente del Ejército de Africa, donde gozaba de gran predicamento. Pero si su prestigio allí era indiscutido, en la Península era sobrepasado por otros mandos más antiguos. Por eso se configuró Sanjurjo como líder carismático, seguido de generales como Rodríguez del Barrio, Villegas, Goded o Fanjul.

La política de las derechas en el poder consistía en desmontar todo lo realizado durante el bienio reformista, de manera que la despolitización emprendida por Azaña en el campo militar fue abandonada. Generales claramente antiazañistas como Franco, Fanjul y Varela fueron ascendidos; los condenados por la *sanjurjada* indultados y perseguidos muchos oficiales con fama de republicanos. En la práctica no se aceptaba que la fidelidad al régimen era un principio ajeno a la simpatía concreta por una opción de partido. En los cuarteles rebrotó un clima antirrepublicano, estimulado por la actitud del gobierno. El fenómeno, evidente desde finales de 1933, se multiplicó a partir de la revolución de octubre. La llegada de Gil Robles al ministerio de la Guerra evidenció que la CEDA, o por lo menos una fracción importante de ella, contaba con el recurso del poder militar para llegar al poder, la

cartera de Guerra fue una compensación pedida por Gil Robles al no concedérsele la presidencia del Gobierno.

Desde entonces, la opción militarista de los conservadores se perfiló claramente. Cierto es que la izquierda acababa de intentar la toma del poder mediante la huelga armada revolucionaria, pero Gil Robles concedió los principales cargos del ministerio a Fanjul, Goded y otros militares conocidos por su actitud abiertamente enfrentada al régimen republicano. A ellos se añadió el general Franco, a quien jamás se habían probado maquinaciones contra el gobierno, pero había iniciado una carrera política con Diego Hidalgo y aparecía como un importante peón a utilizar.

El había personalizado el mando de las operaciones en Asturias en un momento en que el Ejército se perfiló como la institución más sólida del Estado. Por delegación suya, había asumido el mando de las tropas africanas el teniente coronel Yagüe, que fue capaz de oponerse al general López de Ochoa, muy superior en grado al Inspector General del territorio. El general era un republicano histórico —por cierto pésimamente tratado por la izquierda— que defendía el principio de autoridad y controlaba a sus fuerzas para llevar a cabo operaciones ciertamente duras pero en los márgenes de la mínima represión posible. Yagüe, en cambio, dirigía una acción muy enérgica de los legionarios y regulares marroquíes. La actitud de Yagüe y Franco, frente a López de Ochoa era un claro antecedente de lo que más adelante podía ocurrir: si el mando militar se oponía a una acción enérgica contra la revolución, podía tropezar con la indisciplina de sus propios subordinados.

Tratar de explotar tales realidades fue una oportunidad aprovechada por Gil Robles. A su derecha, formaciones y grupos minoritarios encabezados por hombres como Calvo Sotelo o José Antonio Primo de Rivera, pedían aún más contundencia en la manipulación de la fuerza e intentaban desprestigiar la línea parlamentaria seguida por la CEDA. Su clamor se dirigía a la política tradicional de la derecha española, acostumbrada a gobernar por la fuerza de las armas.

El reformismo republicano había caído en el error de aceptar también este camino desde 1931; acuciado por la agitación social, el mismo gobierno provisional había acudido a la proclamación del estado de guerra ante la quema de conventos. Más adelante la Ley de Defensa de la República intentó conducir el orden público mediante procedimientos civilistas, pero el recurso a los soldados jamás se abandonó con la consiguiente politización del Ejército. Cuando la derecha acudió a él en la revolución de 1934, faltaban argumentos para condenarlo claramente.

El paso de Gil Robles por la cúspide militar marcó un recrudecimiento del problema. El ministro y sus colaboradores trabajaron para convertir al ejército en el instrumento de la contrarrevolución, aunque el proyecto gilroblista no era una dictadura militar sino un fuerte poder conservador, apoyado por la fuerza de las armas. Su error de cálculo más importante fue creer que el poder militar español era fácilmente dominable y que, una vez lanzados a la acción, los mandos africanistas aceptarían fácilmente la supremacía de los “políticos profesionales”, grupo continuamente denostado durante la I Dictadura que era para muchos de ellos, un ejemplo de buena administración política.

A diferencia del siglo XIX, el militarismo de los años 30 rehusaba ser el brazo armado de un partido concreto. Por lo menos desde el golpe de Pavía, el intervencionismo militar tendió a sentirse “por encima de la política”; había crecido el sentimiento corporativo y los oficiales se sentían servidores de la Patria, pero no de “grupos políticos civiles”.

Todo ello se evidenció cuando los conspiradores monárquicos comprobaron la

dificultad de atraer masivamente a los militares. Más adelante también Gil Robles lo comprobó, cuando el gobierno Lerroux estaba a punto de caer y con él el poder de la CEDA, los generales de su equipo sondearon las guarniciones. El ejército no estuvo dispuesto a tomar las armas para que Gil Robles siguiera en el ministerio. Evidentemente existía en los cuarteles un amplio malestar político, pero el intervencionismo castrense se necesitaba sentirse arropado por la mayoría indiscutible de la que Primo de Rivera habría llamado el pueblo sano. Únicamente así contarían con el respaldo necesario para el triunfo y se sentirían servidores de la totalidad patriótica, no de una fracción concreta. Simultáneamente sería el ejército quien administrara el futuro, sin subordinarse. Ello coincidía con las teorías reaccionarias, elaboradas con ideas del fascismo y del nacionalismo francés, partidarias de una monarquía católica, patriótica y militar, apartada del parlamentarismo y la democracia, verdaderos males del mundo moderno. Fundamentalmente el grupo de intelectuales nucleada por *Acción Española* explicitaba la teoría, conocida únicamente por escasos militares, como Jorge Vigón, pero con suficientes coincidencias con la mentalidad mayoritaria en los cuartos de banderas para ser rápidamente aceptada.

A principios de 1936, la mayoría de los militares no contemplaba con simpatía la posibilidad de otro gobierno reformista y se aproximaba a los planteamientos de la derecha reaccionaria. No existe constancia de que las tendencias más cercanas a los fascismos europeos tuvieran un predicamento amplio más allá de algunos oficiales jóvenes. El sentimiento mayoritario de los oficiales apreciaba mejor las llamadas al orden, la exaltación de la autoridad y la recuperación del pasado defendidos por el reaccionarismo que las vagas promesas de un tiempo nuevo de José Antonio Primo de Rivera. No en vano éste, en sus apelaciones públicas a los militares, insistía más en los componentes reaccionarios y autoritarios de su pensamiento que en las promesas sociales. Su esfuerzo no tuvo, sin embargo, apenas eco entre los uniformados que le miraban con recelo, en parte por su soflamas "revolucionarias", en parte por sus intentos de constituir milicias armadas que podían revelarse como competitivas respecto al poder militar, como ya había ocurrido en Alemania, aunque tal extremo no era conocido sino intuido por los militaristas españoles de la época.

En el caso particular del general Franco, las elecciones de febrero de 1936 supusieron el abandono de la cautela, cuando se anunció el triunfo del Frente Popular, intentó vanamente proclamar el estado de guerra y, más tarde, al repetirse las elecciones en Cuenca, que era uno de los feudos clásicos de caciquismo, dió su nombre para la candidatura de las derechas. Es decir, que contra su costumbre de actuar en la sombra, aceptó un compromiso político al que renunció cuando le hicieron saber que su nombre prestaba un tinte excesivamente conservador y poco fiable a la opción de derechas, y podía espantar al electorado. El general prefirió regresar a sus queridas posiciones de recato personal. Precisamente había sido José Antonio Primo de Rivera quién desaconsejó una intervención en la candidatura.

Aunque perdió las elecciones de 1936, la derecha tenía ya un buen grado de organización, nada parecido al desconcierto de 1931. La pérdida de las elecciones generó un sentimiento de tragedia y de búsqueda de una pronta solución. La vía parlamentaria, lenta y recién fracasada, perdió crédito para grupos sociales que siempre la habían considerado un mal menor y la sensación de que era necesaria la intervención armada se extendió a ojos vistas. La existencia de la República se había caracterizado por la existencia de continuas conspiraciones derechistas, incapaces de llegar a un acuerdo sólido. La dispersión conspiratoria encontró tras la derrota de febrero, una posibilidad de unión. Por tal razón, la poco formal organización de generales que se reunía en Madrid esporádicamente, concedió autorización a Mola para tejer un pacto amplio e indefinido. Lo uno era consustancial con lo otro. Si el acuerdo no defendía un proyecto partidista sería más grato a los militares, que

se sentían por encima de los partidos (o sea de los políticos civiles), permitiría atraer desde las débiles formaciones de la extrema derecha fascista hasta algunos republicanos conservadores y emparedar entre ellos a carlistas, monárquicos, primorriveristas nostálgicos, reaccionarios y semidemócratas de toda laya. Ello quedó claramente perfilado en las reuniones madrileñas de los generales: el futuro movimiento debía ser “salvador de España y apolítico”. La consecuencia inmediata, quizá más intuída que estudiada por los conspiradores, era la indefinición de las fuerzas políticas y su subordinación al poder militar, armazón de la conjura, esqueleto del golpe y única fuerza cuyos objetivos inmediatos eran tan simples que podía capitanear toda la acción.

Por otra parte, esta división española, primero en partidarios del Frente Popular o del Nacional, luego de la legalidad democrática o del golpe de Estado, conectaba con el maniqueísmo, tanto de la izquierda autoritaria europea, como del reaccionarismo y del militarismo. Con pocas vacilaciones, las fuerzas políticas conservadoras aceptaron esta primacía militar, únicamente los carlistas, históricamente poseedores de capacidad armada propia, dilataron el acuerdo hasta última hora. El resto de la derecha española se asió al clavo ardiendo de la subordinación a los oficiales que eran capaces de acabar con el gobierno del Frente Popular. Para ellos representaba la única solución después de que había fracasado el intento político de conservar el poder mediante la civilizada vía de las elecciones.